

CONFLICTO, DEPREDACIÓN Y TERRITORIOS

BORIS SALAZAR¹

¿A dónde van los que huyen de la guerra? Y los que permanecen en los mismos lugares, ¿por qué lo hacen? Y unos y otros, ¿por qué razones están donde están? Hablo de razones y no es fácil justificarlo. Al fin y al cabo no es fácil aducir razones cuando lo que está de por medio es la amenaza de una guerra irregular que se extiende por todo el territorio nacional. No es difícil ver que el razonar estaría limitado, en forma grave, por el terror y por la amenaza directa a la supervivencia. Hablo de razones en un sentido limitado y bien definido: en el sentido de razones instrumentales y prácticas asociadas al deseo de sobrevivir y de usar las oportunidades económicas disponibles. Esas razones, intentaré argumentarlo en estas páginas, han permitido la lenta construcción de un nuevo orden social, basado en arreglos de coordinación ineficientes entre las organizaciones armadas y los ciudadanos, y de un nuevo orden territorial que refleja las características y limitaciones de ese tipo de arreglo social.

Una versión optimista de la situación espacial del conflicto armado colombiano podría discurrir así. El país está dividido en tres grandes territorios cada uno bajo el control de uno de las tres organizaciones armadas que hoy se disputan el poder: Las autodefensas o grupos paramilitares mantienen un férreo control de la zona Norte, empezando por la región de Urabá, que se extiende a lo largo del río Magdalena hasta el centro del país, disputan en forma abierta y violenta, casi casa por casa, el control del puerto petrolero de Barrancabermeja, han penetrado con fuerza en el Valle del Cauca y en las áreas que lo rodean, y ya disputan a sangre y fuego la gran zona de producción de coca del país: los departamentos del Putumayo y del Caquetá. Las FARC mantienen un control absoluto de la zona de despeje y, en general, pero ya en disputa, del Sur y del Sur Oriente del país, y mantienen cabezas de playa en lugares situados hacia el Norte (cerca de la capital, Bogotá) y

¹ Profesor e investigador del Departamento de Economía de la Universidad del Valle. El autor quiere agradecer muy útiles conversaciones sostenidas con María del Pilar Castillo y Harvy Vivas.

hacia el Occidente. El Ejército y la policía regulares tienen bajo su control el llamado país central: aquel en que se concentran las grandes ciudades y la mayor parte de la población urbana y de la actividad económica del país.

La versión optimista no pretende, por supuesto, que se trata de un estado estable. Aceptaría sin mayor discusión que vastas áreas en disputa concentran la acción militar de las guerrillas, los paramilitares y las Fuerzas Armadas. En ese mismo Sur Oriente de las Farc, en el que se concentra el 60% de la producción mundial de coca (Bowden, 2001), las fuerzas especiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Policía han venido realizando, en forma sistemática, vastas operaciones anti drogas y, en los últimos días, han pasado a la ofensiva en el Vichada y en otras áreas, mostrando los primeros resultados reales del Plan Colombia en el aspecto militar. En otros lugares (el Sur de Bolívar, el Magdalena Medio) el ELN intenta mantener lo que consideraba sus zonas tradicionales de influencia y desarrollo ante el avance de las organizaciones paramilitares y de las FARC, y ante la oposición creciente de una población que no quiere aceptar ni su presencia ni su protección. En zonas de Urabá, las fuerzas paramilitares y la población que dicen proteger están bajo el constante asedio de las Farc. Y en las ciudades mismas puede verse la fluidez de la lucha por el poder: en las comunas de Medellín, la autoridad se resuelve en forma precaria entre las milicias guerrilleras, las antiguas pandillas hoy organizadas y generadoras de orden, y la supervisión indirecta, y muchas veces directa, de las organizaciones paramilitares de Córdoba y Urabá. En Cali, con organizaciones ilegales menos estructuradas, la disputa por los territorios ha elevado la cifra de homicidios a los niveles más altos de todos los tiempos.

Las últimas frases deben haber dado una pista acerca del exagerado optimismo de la supuesta división tripartita del territorio nacional. Ni la división es clara ni es estable ni es percibida como estable por ninguno de los agentes armados. Que las fronteras son borrosas en esos territorios puede verse en los números crecientes de masacres, combates, ejecuciones, desplazados y movimientos de tropas. Puede verse también en el lenguaje de los combatientes: mientras que las Fuerzas Armadas, por intermedio de sus comandantes, dan un parte de victoria por sus operaciones en el Vichada, y pronostican el arribo de la paz en unos dos períodos de gobierno, el máximo comandante de las Farc, advierte por escrito a los parlamentarios que son objeto de canje, y el jefe político de las autodefensas reclama la legitimidad de sus acciones y su lugar en el proceso de negociación de la paz.

Pero hay un elemento adicional que desnuda el optimismo de esa división tripartita. En la región central, en la que se concentra la mayor parte de la población y la actividad económica del país, en el corazón de sus ciudades más grandes, que están, supondría la proposición optimista inicial, bajo la sólida protección de las Fuerzas Armadas del Estado, se está librando una disputa creciente por el control territorial, que no pasa por la página política o nacional de los periódicos, y apenas si alcanza a aparecer en el diario conteo de muertos de sus páginas judiciales. Como un gigantesco queso de Gruyere que se va desplomando por dentro, por efecto de la acción silenciosa de agentes muy activos, el orden estatal va

desapareciendo en zonas considerables de las grandes ciudades del país y, en su lugar, nuevos ordenes primitivos luchan por reemplazarlo en un proceso fluido y complejo cuyo resultado todavía está por conocerse.

Se dirá que no se trata sino de las acciones de una delincuencia común desbocada por la presión que recibe desde todas partes una fuerza pública insuficiente. Que los jóvenes de las comunas de Medellín y de Cali no hacen más que la continuar, a una escala mayor, las carreras delictivas que otros jóvenes, de los mismos o de otros vecindarios, debieron seguir en el pasado, presionados por la falta de oportunidades y por la ausencia del Estado. Que no es más que un asunto de policía y de intervención social que ya resolveremos cuando hayamos sellado la negociación definitiva con los actores políticos del conflicto. Pero esta explicación no resiste un examen serio.

El primer supuesto fuerte detrás de esta explicación optimista es la pertinencia de distinguir el conflicto armado, de origen social y político, de la violencia cotidiana de las ciudades, ligada a la delincuencia común y a la intolerancia, y cuyos orígenes serían sociales, pero nunca políticos. La historia y la sociología, y hasta la literatura, son abundantes al respecto: en los últimos cuarenta años se ha desarrollado una tradición colombiana muy respetable que relata e intenta explicar los procesos que llevaron a la creación y consolidación de las guerrillas y de las organizaciones paramilitares que hoy se disputan el poder en Colombia. Esa literatura ha establecido a la guerrilla, en mayor medida, como un agente político armado que pretende la destrucción del Estado para reemplazarlo por otro. De allí, entonces, su presencia en la mesa de negociaciones. Ha sido mucho más reticente con las organizaciones paramilitares: sus orígenes como anti agente destructor de la base de apoyo de las guerrillas no le han permitido alcanzar su legitimidad como agente político. Aún así la mayor parte de los analistas, y el público en general, convienen en aceptar el carácter de actores armados y políticos para esas organizaciones y la validez de un proceso de negociación con ellos. Y aunque no se diga en forma abierta, hay un consenso implícito en que ya han ganado su lugar en una eventual negociación del poder, cualquiera que ésta sea.

No ocurre así con la multitud de organizaciones criminales o ilegales que se disputan el control territorial de áreas importantes de las ciudades más grandes del país. No es fácil hacerlo de todas formas: no responden a un mando central unificado, no tienen objetivos conocidos, no disfrutan de voceros oficiales, no poseen nombres (salvo en algunas noticias judiciales). Tampoco han contado con la copiosa historiografía y literatura de que ha disfrutado su par político. Han tenido alguna publicidad dudosa en algunos relatos exhibicionistas y en una que otra película realista o cuasi realista, y han contado con algunos investigadores serios (Salazar, 1994, 2001; Vanegas, 1997; Urrea y Quintin, 2000) que han intentado entender qué es lo que ocurre en la otra violencia colombiana.

¿De Qué Orden Social Hablamos?

Hay, claro, una justificación metodológica y política fuerte para insistir en esta diferenciación. Comentando el último libro de Daniel Pécaut, *Guerra contra la sociedad*, Gonzalo Sánchez (2001) planteaba lo siguiente:

“No obstante las sólidas argumentaciones de Pécaut, quisiera insistir no sólo en la necesidad de interrelacionar tipos, formas y prácticas de violencia, sino también la necesidad de diferenciar y jerarquizar. Lo contrario (...) sería cerrar el horizonte de la negociación. Permítanme plantear provisionalmente el problema en estos términos: tiende a acentuarse una tensión entre por un lado, el reconocimiento académico de las interferencias de lo político con lo no político, y por otro las necesidades de resaltar las diferencias, estimularlas, inducir las, si no queremos caer en una visión puramente criminológica, como la que ha venido extendiéndose a partir del influyente texto de Mauricio Rubio *Crimen e Impunidad*”.

Y allí está el nudo de la cuestión. ¿Desde dónde, desde qué teoría, desde qué visión de la sociedad colombiana y de su evolución reciente, podemos “diferenciar y jerarquizar” las acciones de los agentes políticos de los no políticos? ¿Qué hace de la guerrilla un agente político? ¿Qué hace de los paramilitares un probable agente político? ¿Qué despoja de todo carácter político a los milicianos, a las pandillas, a las organizaciones que se disputan el control territorial en ciertas zonas de las grandes ciudades? ¿Qué hace distinto el accionar de guerrillas y paramilitares de que realizan las organizaciones delictivas y criminales de las ciudades? ¿Cómo desconocer sus conexiones evidentes, sus relaciones no casuales, la retroalimentación que tienen sus acciones?

Intentaré presentar mi propia visión del problema, y de paso haré los comentarios pertinentes a otros puntos de vista. Lo que está en juego aquí no es tanto el carácter político o no político de las organizaciones al margen de la ley en Colombia. Lo que en verdad está en juego es la teoría y la visión que tenemos de la sociedad colombiana de hoy y del conflicto que la atraviesa. El título del último de Pécaut puede servir como punto de partida: *Guerra contra la sociedad* sugiere que las acciones de los agentes armados al margen de la ley no tienen como blanco exclusivo a las Fuerzas Armadas del Estado, sino a la sociedad toda. Es una guerra librada contra la sociedad en el sentido más fuerte de la expresión: para destruirla, para socavar su orden, para imposibilitar su funcionamiento tal como lo conocemos hoy. Es una guerra muy cruel en particular porque se ensaña con la población desarmada e indefensa. Hasta allí no hay ningún problema. Las dificultades surgen con la exterioridad de la amenaza y de la guerra que golpean a la sociedad colombiana. Guerra contra la sociedad supone que elementos externos a la sociedad están decididos a destruirla y pueden hacerlo. ¿Cómo justificar la exterioridad de estos agentes? ¿Cómo explicar la genealogía de estas organizaciones guerrillas y

paramilitares que se empeñan en destruir el orden social establecido? ¿Cómo entender la exterioridad de unos agentes que a nombre de representar a los indefensos y a los más débiles los masacran y depredan en forma sistemática? ¿De dónde vienen, entonces? Y, sobre todo: ¿Cómo esa sociedad permitió su crecimiento amenazador hasta el punto en que ahora nos encontramos hablando, no ya de una amenaza más o menos fuerte, sino de la realidad de una guerra deliberada contra ella? Peor aún: ¿cómo muchos agentes de esa sociedad siguen haciendo arreglos, manteniendo negocios, estableciendo contratos con esos enemigos abiertos de la primera?

La alternativa que quiero presentar aquí es que la guerra contra la sociedad no proviene del exterior y no es conducida por organizaciones que, desde fuera, y por muy diversos motivos, pretenderían destruirla. En realidad, se trata de una guerra contra la sociedad conducida desde la sociedad misma. O, más que de una guerra contra la sociedad se trata de la sustitución silenciosa y efectiva de un orden social, que se ha venido desplomando desde hace varias décadas, por un nuevo tipo de arreglo social cuyas características y genealogía aún están por estudiarse. No es una sustitución reciente y repentina y no es, tampoco, el producto de prácticas irracionales que se habrían desplegado de pronto en la sociedad colombiana. Usando el lenguaje de la teoría de juegos, diría que la actual situación de guerra irregular es un estado de equilibrio, resultado de un proceso evolutivo que desembocó en la coordinación social que hoy observamos. Tomando la Violencia clásica como el punto de inflexión de la historia reciente de Colombia, supongo que tres tipos de acción (o estrategias) se convirtieron en parte permanente de la interacción social entre los colombianos. Primero, la depredación, entendida como la apropiación por la fuerza de los bienes, las propiedades, los capitales, los servicios y el dinero de individuos que no pueden, no consideran viable, defenderlos. Segundo, el uso de la tecnología armada como fuente de poder y de ejercicio permanente de él. Tercero, la consolidación de las organizaciones armadas como la forma más efectiva de asociación para sobrevivir y ejercer el poder en una sociedad en estado de guerra.

¿Por qué los colombianos habrían tenido que heredar de la Violencia clásica esas tres formas de interacción estratégica? ¿Por motivos congénitos, culturales, históricos? ¿Por algún destino manifiesto que nos ha conducido sin remedio al estado en que hoy nos encontramos? ¿Por efecto de la exclusión social y política surgida de los acuerdos del Frente Nacional? ¿Por los graves errores históricos cometidos por las elites dominantes? Las respuestas son todas negativas, por supuesto. En realidad, se trata de algo más simple, pero también menos fácil de aceptar: es la respuesta racional que unos agentes, enfrentados a una situación estratégica bien particular, lograron a través de un proceso evolutivo muy poco estudiado por nuestras ciencias sociales.

Un relato muy esquemático lo bosquejaría así: una población dotada de forma muy desigual para la supervivencia, heredó de la Violencia clásica una situación muy compleja en la que se combinaban un Estado débil y áreas de anarquía generalizada. Unos ya estaban agrupados y tenían armas, otros, debido a su riqueza

o a su posición, disponían de medios de protección más efectivos (el Estado, por ejemplo), otros no eran visibles, y otros muchos no disponían de ninguna de las alternativas anteriores. Nótese que no se trata de postular la desigualdad de los individuos desde el punto de vista de su racionalidad. Supongo, por el contrario, que todos disponían de algún tipo de racionalidad limitada o que estaban en el proceso de construirla.

Desde ya resulta obvia la filiación Hobbesiana del modelo que intento presentar. La diferencia con respecto al modelo original de Hobbes está en suponer la existencia de dotaciones diversas para la guerra y para la supervivencia. Los demás elementos del de la perspectiva clásica de Hobbes se mantienen. En particular, supongo que agentes racionales, conocedores de su dotación para la guerra y de su poder, elegirán entre depredar a sus oponentes o pagar, en diversas formas, por su protección. Presentaré el argumento teórico en varios niveles. Desde el punto de vista de la teoría de juegos evolutiva más simple (Maynard Smith, 1982; Young, 1998), podríamos decir que la estrategia depredadora, que brinda un pago mayor al promedio de las otras estrategias observadas por la población en un cierto momento, tiende a imponerse y a desplazar a las estrategias “cooperadoras”. La razón es clara: encuentros entre organizaciones e individuos que observan la estrategia depredadora con individuos y organizaciones que siguen estrategias que favorecen la cooperación terminan con un pago mayor para los primeros y pérdidas de bienestar, o de pago, o de la vida (en caso de no llegar a ningún tipo de coordinación), incluso, para los segundos. En el conjunto de la población, los individuos y organizaciones que favorecen estrategias cooperadoras terminan siendo víctimas de los que siguen la estrategia depredadora. La proporción de la población que sigue la estrategia depredadora debe crecer, entonces, con respecto a la que no lo hace. La dinámica parece simple y contundente, pero enfrenta dificultades a la hora de explicar el comportamiento de la población en Colombia.

En primer término, una población compuesta de puros agentes depredadores, o en la que la única estrategia superviviente es la depredación sistemática, no puede sobrevivir en su conjunto. Es obvio que los agentes depredadores necesitan a quién depredar. Si estos últimos desaparecen en forma absoluta, o disminuyen con respecto a una cierta proporción crítica, los depredadores también tenderían a desaparecer. En segundo lugar, como ya lo había planteado, no todos los agentes están dotados de la misma forma para seguir la estrategia depredadora. Esta dificultad puede verse en forma más nítida si intentamos enumerar los probables componentes de una “función de dotación” que discriminara a los agentes de acuerdo a su mayor o menor probabilidad de seguir una estrategia depredadora creíble: ingresos, recursos económicos, acceso a la tecnología armada, capacidad militar, nivel de organización, acceso a la información. Es obvio que en la Colombia de hace cincuenta años, y en la de hoy, estas variables estaban y siguen estando distribuidas de forma bastante desigual. Y es obvio, además, que los primeros en hacer uso de organizaciones armadas y de la amenaza militar para incrementar sus probabilidades de supervivencia y control tienen ventajas históricas duraderas sobre los que se iniciaron

más tarde, o los que no tienen ni los recursos ni la experiencia para hacerlo.

De otro lado, la estrategia depredadora tiene su contrapartida necesaria en el comportamiento de la población civil, sobre todo en las regiones en disputa (incluidas las ciudades más grandes del país) y en las de colonización reciente y de frontera. En esos lugares, la población “usa” la protección de los grupos armados con el fin de concretar sus aspiraciones económicas y asegurar su supervivencia. Al no haber definiciones ideológicas definitivas (ni “etiquetas” permanentes y sólidas), la población fluctúa entre la protección de los distintos agentes armados. Incluso, como se verá más adelante, cuando ha debido desplazarse, siempre tiene la opción del regreso. Se da, entonces, un proceso de reforzamiento mutuo de expectativas entre las organizaciones armadas y la población civil.

¿Deben desaparecer, entonces, en forma irremediable los menos dotados para la depredación? Los agentes peor dotados, los que tienen menor acceso a la riqueza y al uso del poder militar, han ideado, a través del aprendizaje, otras formas de sobrevivir. La primera: unirse a los más fuertes, aceptar su protección, pagar incluso por ella cuando existen los recursos económicos, o intercambiar lealtad a alguna organización armada a cambio de protección, cuando no los hay. La segunda, derivada de la anterior: pagar por la información requerida para sobrevivir, pagar para disminuir el grado de incertidumbre en el que se vive. En aquellas regiones en las que la disputa territorial entre las organizaciones guerrilleras y las paramilitares es más intensa, la población se enfrenta a la disyuntiva de escoger la protección más adecuada o desplazarse. Para tomar una decisión adecuada, en un contexto de tanta incertidumbre, requiere de información. Y la información, también, es costosa. Un inmenso espectro de mercados, de contratos de seguridad y de intercambios de lealtad y apoyo logístico por protección ha crecido en las últimas décadas en Colombia (en especial en la última). Aprender a sobrevivir en nuestro país ha permitido crear una red de instituciones de intercambio y de regulación a través de las cuales la población intenta aumentar sus probabilidades de supervivencia en un contexto de alta incertidumbre. Podría decirse que para los menos dotados y para los más débiles, la estrategia elegida ha sido negociar la supervivencia.

Todo esto conduce a un equilibrio de coordinación social definido de esta forma: los agentes prefieren una situación como la descrita (en la que unos pagan y otros depredan en diversas modalidades) porque es preferida por la mayoría, pero no la preferirían si la mayoría no lo hiciera. ¿Cómo es posible esta situación? A primera vista parece contradictoria: si los agentes son racionales y no prefieren la alternativa que están eligiendo, ¿por qué lo hacen? Porque su lógica no tiene nada que ver con el valor intrínseco o con la superioridad natural de este arreglo de equilibrio sobre los demás arreglos sociales posibles. De hecho, no es difícil establecer que no sería preferido por cada uno, si la mayoría ya no se hubiera inclinado por él. Si esa mayoría se rompe o se resquebraja, ya no será un arreglo de equilibrio y la sociedad buscará coordinar sus acciones de otra forma. ¿Qué lógica social estaría detrás de este tipo de equilibrio de coordinación? En situaciones estratégicas con agentes de racionalidad limitada, los equilibrios resultantes no son el producto de la maximización

de alguna función de utilidad o de bienestar, sino de la interacción repetida entre agentes que tratan de coordinar sus acciones teniendo en cuenta los costos de complejidad involucrados en sus decisiones.

¿Cómo describir, entonces, la situación colombiana? ¿Nos encontraríamos en un estado de guerra de todos contra todos? No, el equilibrio de hoy es la superación, alcanzada a través de un proceso evolutivo, del estado inicial de guerra de todos contra todos. ¿Qué ganan los agentes que aceptan la depredación? Su supervivencia y con ella la continuidad de sus actividades económicas. Por eso, se trata de un proceso de coordinación social cuyo resultado no es el mejor para todos y es siempre mejorable. Una versión del conocido juego de la “gallina” (*chicken*) puede servir de ilustración para lo que está ocurriendo en Colombia.

	D	H
D	1, 1	0, 2
H	2, 0	-1,-1

Se trata de un juego de dos jugadores, $N = 1, 2$, con dos estrategias puras: D (“paloma”) o H (“halcón”). Los pagos para el jugador 1 aparecen en las filas, y para 2 en las columnas, y están ordenados así: $2 > 1 > 0 > -1$. La anécdota del juego es más o menos conocida: unos jóvenes (o no tan jóvenes: recuérdese a James Dean) marchan el uno hacia el otro conduciendo vehículos a toda velocidad. El que cede primero, desviándose del choque, pierde (de allí el pago de cero), el que se mantiene gana (pago de 2). Si ambos continúan sin desviarse sería el desastre total y el peor par de pagos (-1, -1). Los dos equilibrios en estrategias puras son entonces: (D, H) = (0, 2) y (H, D) = (2, 0). Hay otro equilibrio en estrategias mixtas, que es menos interesante para nuestros propósitos: que ambos jueguen con probabilidad 1/2 cualquiera de las dos estrategias. Ceder tiene la ventaja obvia de asegurar la supervivencia --de allí su pago de cero: nada ha cambiado. Es claro que resultan dos tipos de jugadores bien definidos: “halcones” y “palomas”. La analogía con la situación colombiana es pertinente: ¿quiénes aceptan aquí el papel de depredados? Obsérvese que no se trata de una decisión de racionalidad pura: no hay ninguna decisión optimizadora inicial que llevaría a una parte de la población a aceptar la condición de depredados en este juego de supervivencia. Podría especularse que la dotación inicial de los individuos los llevaría a “caer” en una posición o en la otra. El punto, sin embargo, es que al salir de la Violencia clásica, no era claro que los individuos supieran cuál era su situación social, cuáles sus probabilidades de supervivencia y su dotación para esos fines. Es más: ni siquiera los mismos derechos de propiedad, que habían cambiado mucho en muy poco tiempo, estaban bien definidos. En esas condiciones, no era fácil evaluar la amenaza y el riesgo existentes en una situación nueva. Lo que hoy vemos es el resultado de un proceso de interacción prolongada, en el que las presiones de la supervivencia y de la coordinación social llevaron a que una parte de la población aceptara posiciones o resultados inferiores en términos de pagos. La conclusión es obvia:

una parte de la población ha aceptado la condición de “depredada” a cambio de la supervivencia y de la continuidad de sus actividades económicas. No hacerlo supondría la guerra total contra un enemigo que, como hemos visto, está mejor armado y tiene niveles más altos de organización. Pero esto no implica que la situación no pueda cambiar: siempre hay la posibilidad de que otro equilibrio sea elegido como forma de coordinación social. Y nada garantiza, tampoco, que el nuevo equilibrio elegido mejore en forma sensible al anterior: es probable que sea superior, pero también lo es el que no lo sea.

		JUGADOR 2	
		NO PAGAR	PAGAR
JUGADOR 1	NO PAGAR	$\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K,$ $\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K$	$-\beta_3 S,$ $\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K - \beta_3 S$
	PAGAR	$\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K - \beta_3 S,$ $-\beta_3 S$	$\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K - \beta_3 S,$ $\beta_0 + \beta_1 P + \beta_2 K - \beta_3 S$

figura No. 1

Con María del Pilar Castillo (1996), habíamos planteado una situación similar en un juego (ver figura 1) de dos estrategias puras (pagar y no pagar). En un modelo posterior (2001), y siguiendo una lógica Hobbesiana, intenté ilustrar la misma situación para un proceso evolutivo. En general, los resultados son consistentes con lo que hemos ilustrado con el juego de la “gallina” como escenario inicial de la interacción entre los agentes. Es claro que los agentes pueden llegar a coordinar sus acciones en cualquiera de las dos estrategias puras disponibles, P (pagar) o NP (no pagar). ¿Por cuál se deciden? Depende del tipo de proceso de evolutivo en el que se comprometan y del aprendizaje que logren en él. Supongamos que el proceso converja hacia la estrategia NP. No se trata de postular agentes propensos al riesgo que decidan, contra viento y marea, no ceder ante la amenaza de los grupos armados. El punto es más sutil. La alternativa real es la de celebrar o realizar contratos que garanticen la seguridad de los agentes involucrados a cambio de una cierta cantidad de dinero, o de algún tipo de actividad que implique el apoyo o la lealtad hacia una organización armada de signo contrario. ¿Cómo justificar esa decisión? Comparando el pago recibido en la alternativa P y el pago derivado de la realización del contrato. Sabemos que si la estrategia dominante es pagar, los que no pagan corren el peligro de incurrir en pagos negativos (que pueden incluir la pérdida de la vida) como resultado de su acción. Si deciden pagar, recibirán un pago igual a $F - \beta_3 S$. Realizar el contrato tendría sentido económico si $\beta_3 S > C$, es decir, si el costo del contrato es menor que

la pérdida de ingreso derivada de la amenaza extorsiva ($\beta_3 S$). En términos de Young (1998,), un contrato es eficiente si no existe otro contrato (u otro arreglo, diría yo) que le dé un pago mayor a ambas partes.

En nuestro caso, para los individuos amenazados no habría, en principio, ningún contrato que les asegurara un pago mayor (a menos que existiera un Estado con el monopolio efectivo de las armas que los protegiera a cambio del pago de impuestos a un grupo armado ilegal). Pero esto es sólo una percepción inicial. Nótese que el giro en las decisiones de los individuos no es el resultado de la aplicación de una poderosa racionalidad que los situaría, de un golpe, en la frontera de eficiencia de la negociación. Se trata de un proceso más complejo. Los que deciden contratar seguridad privada o hacer intercambios de dinero o lealtad por protección permanente con grupos de auto defensa aprenden que existe un vasto rango de contratos para mejorar los pagos que reciben por sus acciones. Es decir, si un número creciente de individuos contrata seguridad y no cede ante la extorsión, el pago por no pagar (NP) crecerá y NP se convertirá en una mejor alternativa y, eventualmente, en una estrategia evolutiva estable. Habrá, entonces, un continuo de contratos, con una característica crucial: a mayor número de contratantes, los costos de contratar seguridad serán menores (economías de escala) y habrá pagos mayores (condición Darwiniana) por adoptar la estrategia de no pagar. Este continuo de contratos incluye no sólo los ya conocidos contratos de seguridad, sino la creación de acuerdos y formas organizativas diversas (asociaciones de apoyo mutuo, cooperativas de seguridad, movimientos contra el secuestro, grupos de vecinos que pagan vigilancia privada). Todos ellas implican un intercambio económico y una disminución de los costos individuales vía el crecimiento del número de asociados.

Antes de avanzar quiero subrayar dos puntos metodológicos fundamentales. ¿Qué se gana términos de la comprensión analítica del conflicto colombiano al sustituir, por ejemplo, la “banalización del conflicto” de Pécaut por los equilibrios de coordinación aquí propuestos? ¿No estoy sustituyendo un vocabulario y un lenguaje por otro? La banalización alude, por supuesto, a la caída de la confrontación política en el terreno muy banal de la tributación forzada, del secuestro y de la extorsión (y a veces, incluso, del simple tráfico de drogas). Alude, también, a la pérdida de apoyo de la población a agentes armados cuyas acciones reales se distinguen muy poco de las realizadas por la llamada delincuencia común. Pero, ¿dónde termina y dónde acaba la banalización? ¿Cuáles son sus límites? ¿Se sostiene sobre la conducta racional de los agentes? ¿De qué conducta racional dependería ese proceso de banalización? ¿O se trata de un proceso espontáneo sólo visible a los ojos del investigador avezado de nuestra realidad?

Es aquí donde el lenguaje de la teoría de juegos puede ser útil. Ken Binmore lo plantea en forma lúcida al referirse a la pertinencia de ver el estado de naturaleza Hobbesiano como un juego:

“Dos cosas son importantes al intentar representar las ideas de Hobbes con un modelo tan simplificado. La primera es que (*paloma, halcón*) y (*halcón, paloma*) son en verdad *equilibrios*. Ningún imposición

externa es necesaria para sostener tal tipo de resultado. Una vez establecido que ambos jugadores intentan actuar como lo especifica el equilibrio, está en el interés de los otros actuar de la misma forma” (Binmore, 1994, 119, bastardillas en el original).

Cuando Binmore excluye la necesidad de usar cualquier imposición externa para evaluar un resultado, se está refiriendo a la independencia de los equilibrios derivados más arriba con respecto a cualquier tipo de acuerdo moral o de respeto por alguna norma que no esté de acuerdo con los intereses racionales de los jugadores. Esta implicación es fundamental para la situación colombiana: en muchas de las posiciones con respecto al conflicto y al proceso de negociación se da por supuesta la existencia de algún tipo de norma moral, o de preferencia por arreglos moralmente superiores, que los agentes del conflicto deberían observar. Así, en lugar de estudiar los intereses y objetivos reales de los agentes del conflicto, de acuerdo a la racionalidad que resulta de la situación en la que se encuentran, se estudia su desviación con respecto a una conducta que estaría basada en el respeto por alguna estipulación ética superior. La afirmación continua de la superioridad estratégica de la solución negociada (sin definirla), en cualquier circunstancia, y sin someterla a ningún examen racional, es una de las consecuencias más nocivas de ese tipo de discurso. Como antídoto analítico para esas excursiones por el mundo de lo deseable o de lo intangible, el lenguaje de la teoría de juegos dispone de una prueba o experimento mental que permite analizar si el resultado propuesto sería aceptable desde el punto de vista de agentes dotados de algún tipo de racionalidad: el análisis de equilibrio en una situación de interacción estratégica.

El otro punto metodológico es que la teoría de juegos es consciente de todo lo irrelevante que puede resultar un análisis de una situación específica realizado a partir de la estructura de un juego de un “solo tiro”. Una vez que el análisis abandona el caso trivial del encuentro único, las posibilidades se multiplican y se dispara el número de formas en que los agentes pueden cooperar para alcanzar algún equilibrio de coordinación. Allí es que el análisis se hace interesante. De nuevo, Binmore lo plantea con agudeza:

“Esta observación pone la pregunta de cuál es el juego “correcto” para servir como paradigma de un problema de cooperación humana a un lado. Una vez que se sabe que la reciprocidad es el mecanismo que hace trabajar las cosas, es claro que es el hecho de la repetición lo que de verdad interesa. La estructura del juego que se repite tiene sólo importancia secundaria” (Binmore, 2001, 220).

Localización y Conflicto: Una Alternativa Analítica

Una vez establecida la existencia, hipotética, de un nuevo orden social en el que las organizaciones armadas imponen arreglos de coordinación con la población civil, quiero presentar una forma alternativa de analizar el problema de la localización

espacial y del orden territorial en una situación de conflicto como la colombiana.

Proposición uno: la población depredada (o con potencialidad de serlo) tiende a elegir localizaciones que la sitúen por fuera del radio de acción percibido de la organización depredadora, a menos que la dominación de esta sea legítima y se haya convertido o esté en el proceso de convertirse en un Estado. En términos un poco más formales, una población de jugadores J existe en un conjunto de puntos situados a una distancia q de x (el centro de la organización depredadora), que se puede representar como la bola cerrada $q(x) = \{y \in R: d(x, y) \leq q\}$. Es decir, la proposición anterior definiría una “frontera” virtual o percibida por los agentes. Aquellos que aceptan la depredación se situarían dentro de ella. Los que no lo hacen tratarían de situarse por fuera de ella: a una distancia mínima del alcance de la organización². Nótese que se trata de un radio de alcance percibido por los agentes, no de una distancia real y precisa que todo el mundo conocería. Esta es una de las consecuencias de la guerra irregular: el conocimiento que se tiene de la situación tiene siempre un carácter incierto.

¿Tienen todos los individuos la misma capacidad de elegir su localización? No, en general el radio máximo de movilidad de un individuo o de una familia dependerá de su vector de dotación para la supervivencia. Se trata de un vector $S = S(Y, W, M, O, T, \Theta)$, definido así: Y , ingreso; W , riqueza; M , capacidad militar; O , pertenencia a alguna organización; T , tecnología armada; Θ , información.

En principio, todo individuo con potencialidad de ser depredado debería intentar localizarse a la distancia mínima que le garantiza quedar fuera del alcance de la organización depredadora. Pero alejarse o desplazarse es costoso en términos económicos, sociales y psicológicos. Y los costos involucrados están relacionados con el vector de dotación para la supervivencia de cada individuo. Por eso, se abre un vasto espectro o rango de alternativas de localización para los individuos. En un extremo estarían los individuos con menores dotaciones que se han localizado, por motivos económicos, en las zonas de colonización interna o de bonanza económica que hoy están en plena disputa por parte de las organizaciones armadas. Sólo cuando la disputa alcanza un grado de intensidad tal que hace imposible tomar decisiones racionales con respecto a la protección por parte de cualquiera de las organizaciones, los individuos tomarán la decisión de desplazarse a una vereda o cabecera municipal cercana, o a una capital departamental. En el otro extremo están los individuos que pueden optar por la alternativa de abandonar el país a un costo positivo, pero todavía alcanzable dentro de su vector de dotación. Entre esos dos extremos, se sitúan todos los demás individuos que deben buscar mayores niveles de seguridad (en el campo, o aún dentro de la ciudad misma) mediante su desplazamiento, o que al no poder hacerlo, tienen que entrar en contratos de seguridad de muy diverso tipo. Los movimientos de localización se multiplican y tienden a concentrarse, de acuerdo a la estructura de las regiones, en ciertas

² Aquí las distancias no son físicas: una dominación legítima en una zona cercana a la controlada por otra organización puede ser considerable o "máxima" desde el punto de vista del objetivo de evitar la depredación.

capitales, y dentro de estas capitales en ciertos sectores, y aún dentro de estos sectores fronteras invisibles comienzan a dividir la ciudad y a generar movimientos de la población que intenta reacomodarse tratando de garantizar su supervivencia.

Dos: los depredados tienden a llegar a acuerdos de coordinación con las organizaciones depredadoras cuando el costo de desplazarse es mayor que el beneficio (o pago) esperado de hacerlo, o cuando el costo de contratar seguridad, o cambiar de protección, es mayor que la amenaza derivada de no llegar a un acuerdo³. Por el contrario, si la pérdida de ingreso derivada de la amenaza es mayor que el costo de realizar el contrato de seguridad, el amenazado no llegará a un acuerdo. Esto último depende de la credibilidad de la amenaza del grupo depredador. Si es alta, el depredado potencial siempre llegará a un acuerdo⁴. Si no lo es, contratar seguridad, o cambiar de protector, se convierte en una buena opción. Pero no todos, por supuesto, pueden contratar seguridad: sólo los que disponen de los ingresos o de la riqueza suficiente lo pueden hacer.

En términos más formales la cuestión puede plantearse así: Sean dos clases disjuntas de individuos I e J que pueden o no establecer relaciones entre ellos. Un individuo de I, la clase de organizaciones depredadoras, le ofrece a uno de J, la clase de individuos que pueden ser depredados, un contrato que no es deseable para éste. Al contrario de lo postulado por Young (1998, 132), no todos los contratos son deseables y en especial los contratos entre una organización depredadora y una víctima potencial no lo son. Por lo tanto, el individuo de J no intentará maximizar la utilidad o el pago derivado del contrato propuesto sino que intentará minimizar el daño causado por la propuesta del individuo depredador. La respuesta del individuo perteneciente a J dependerá de su vector de dotación o de atributos: $S = S(Y, W, M, O, T, \Theta)$, ya definido más arriba. Supóngase la siguiente situación. Un individuo con valores altos de riqueza e ingreso es una víctima potencial más probable que otro con valores cercanos a cero en esas dos variables. El mismo tipo de individuo, sin embargo, puede tener acceso a la información, a la tecnología armada y a la capacidad militar de una organización vendedora de protección. Por lo tanto, puede decidir hacer un contrato con otro tipo de organización, cuyo servicios tengan un costo menor que la probable pérdida de ingresos por la ejecución de las amenazas del depredador. En este caso el arreglo social que constituye la depredación no tendría lugar y se daría un contrato alternativo⁵.

³ Puede decirse de otra forma: si el costo de evitar la depredación es mayor que el beneficio esperado por aceptarla. Esto permitiría ver el problema desde el ángulo de las decisiones de individuos que quieren, al mismo tiempo, sobrevivir y hacer uso de las oportunidades económicas disponibles.

⁴ Un artículo de Dal Bó et al. (2001) plantea una situación similar con respecto al problema de la corrupción de funcionarios públicos en países como Colombia: "¡plata o plomo!" es la alternativa y si la amenaza es creíble es mejor recibir el soborno que arriesgarse a perder la vida. Para la población la amenaza es: ¡La bolsa o la vida!

⁵ Como se puede ver en Castillo y Salazar (1996) y Salazar (2001) para llegar a este tipo de decisión se requiere de un proceso de aprendizaje. Sólo después de sufrir los rigores de la depredación muchos individuos decidieron contratar seguridad privada o contribuir a la formación de grupos de autodefensa.

En el otro extremo, un individuo de bajos ingresos y sin riqueza, no podrá considerar contratos de seguridad alternativos. Y aunque tuviera acceso a la tecnología armada, su falta de organización lo dejaría inerte ante la amenaza de la organización armada. Su única respuesta es aceptar la protección de la organización depredadora a cambio de lealtad, información o apoyo logístico.

En general, puede construirse un orden de preferencias de los individuos sobre los contratos que los Estados embrionarios o las organizaciones depredadoras les ofrecen. Ese orden, de mayor a menor, clasificaría como las opciones más preferidas a aquellas asociadas a los menores costos de protección o de seguridad. Un Estado legítimo debería reunir dos requisitos mínimos: el tener los menores costos de protección (lo que no quiere decir que tenga la menor tributación: la protección no haría parte de una relación especial, sino del monopolio de la fuerza por parte del Estado), y el ser compatible con las preferencias reales de los individuos en materia de orden social. Debo subrayar que el primer requisito puede ser cumplido por organizaciones armadas que logran brindar protección a costos menores que otras, pero no ocurre así con el segundo: sólo una organización estatal que tenga en cuenta, en forma libre, las preferencias de los individuos en cuanto al orden social puede ser aceptada como legítima.

Esto me lleva de nuevo al problema de las relaciones entre arreglos de coordinación social y las preferencias de los individuos por ellos. En general, todo acuerdo de depredación es inferior en términos de preferencias a otro tipo de contrato social. Por eso, no todo acuerdo de coordinación puede considerarse como beneficioso para los que participan en él. David Gauthier propone un criterio más fuerte para decidir si una práctica de coordinación puede considerarse como beneficiosa:

“(...)Una práctica es beneficiosa si una persona prefiere que (casi) todos los demás se adhieran a ella antes que (la mayor parte de) los demás prefieran no realizar dicha práctica, y además no prefiere (fuertemente) que (casi) todos los demás se adhieran a alguna otra práctica” [Gauthier, 1986 (2000), 28].

Esa no es la situación colombiana. En términos lógicos, los agentes que aceptan la depredación no la prefieren (la consideran inferior a otras alternativas). Sea A el agente depredado y B el depredador, x la acción que no incluye depredación (podría ser una dominación legítima), e y la acción que implica depredación. La preferencia de A es $x \succ y$, la de B es $y \succ x$. La conclusión, sin embargo, en términos de acciones reales, es y . Por lo tanto, una parte de la población debe aceptar una relación o estado que no prefiere. Se trata de una situación no beneficiosa, pero inevitable, en la medida en que el costo de evitar la depredación es mayor que el beneficio esperado de lograrlo, y que la dotación para depredar es asimétrica.

Tres: la efectividad militar y tributaria de la organización depredadora es decreciente con respecto a la distancia de su centro operativo (Polo, 1995). Entre más lejos se encuentre de su centro firme o de sus cuarteles generales menos

efectivas serán sus operaciones militares y de depredación. Esto no quiere decir que las organizaciones depredadoras no puedan expandirse. Lo pueden hacer pero a un costo mayor, con riesgos más altos y con menor efectividad. De hecho, los cambios tecnológicos adoptados por las Fuerzas Armadas regulares muestran que desplazamientos de grandes contingentes de tropas por fuera de la zona de despeje puede resultar en extremo costosas para las Farc.

Cuatro: el efecto negativo de la distancia se ve afectado por la existencia de redes sociales (Chwe, 2000) propias de las organizaciones depredadoras, o penetradas o penetrables por parte de ellas. Esas redes son las que permiten difundir y obtener información, planear acciones lejos del centro firme de la organización, coordinar acciones con otro tipo de organizaciones (no políticas, criminales) y ampliar el radio de tributación. En general, como lo plantea Chwe (Op. Cit., 4) se trata de redes jerarquizadas con un punto central que distribuye la información y las ordenes hacia abajo y que asegura, por tanto, con un miembro en cada nodo, la realización de acciones que resultarían muy costosas de otra manera.

La existencia de redes sociales genera nuevos interrogantes estratégicos. Si todas las organizaciones depredadoras construyen redes como parte de su expansión, ¿cómo pueden entenderse las relaciones entre esas redes? ¿Se superponen? ¿Coexisten en forma pacífica? ¿Actúan sobre territorios distintos, conservando las fronteras existentes? Una hipótesis razonable es suponer que las redes se superponen en diversos territorios y que en los puntos de coincidencia entre ellas deben generarse zonas de disputa violenta que pueden llevar a la cooptación de una red por otra de signo contrario, o a la desaparición del tramo correspondiente de la red de la organización derrotada en esa zona específica⁶.

Como lo sugiere Daniel Pécaut, la expansión y la superposición de las redes sociales de la guerrilla y las autodefensas, además de las redes pertenecientes a otras organizaciones menores y no reconocidas como agentes políticos, ha transformado el territorio y el espacio del conflicto:

“En estas condiciones, puede hablarse de una cierta homogeneización del espacio, puesto que todos sus puntos se encuentran orientados hacia los actores armados. Pero, sobre todo, este espacio se desmaterializa: cada uno de sus puntos es definido por su posición, real o virtual, en las redes a través de las cuales se ejercen las presiones de los grupos armados. Se vuelven así “un no lugar”. Marc Augé ha utilizado este término para designar los espacios de circulación vinculados con la “sobremodernidad”. Lo retomo por mi cuenta, pero para hacer referencia a espacios que, privados de toda característica material, resultan de las interacciones entre redes de fuerza” (Pécaut, Op. Cit., 238-9, comillas en el original).

⁶ Una interpretación natural de ciertas masacres en zonas que han cambiado de bando dominante tiene que ver con la indefensión en la que quedan los miembros de las supuestas redes de apoyo del grupo derrotado: aunque la acusación no sea precisa, el nuevo grupo dominante tiene que mostrar su capacidad de aniquilar cualquier apoyo a la organización desplazada.

Más que la pérdida de toda materialidad, lo que supone la superposición y penetración de redes sociales en el espacio es el paso de una visión del territorio como controlable en términos físicos por la organización que está asentada en cada región o zona, a una interpretación del mismo como un espacio virtual en el que la presencia de redes de distinto signo mantiene un movimiento fluido de la dominación por parte de las organizaciones armadas. Pero esto no implica que las oscilaciones en el control de los territorios puedan mantenerse para siempre. La intensidad de la guerra en algunas zonas en disputa lleva a que se alcance cierto tipo de definición que luego puede consolidarse si la organización victoriosa es capaz de lograr las alianzas y vínculos sociales que aseguren su legitimidad como garante del orden político.

A Manera de Discusión

No se puede olvidar que los Estados nacionales de hoy nacieron de poco más que del ejercicio del control territorial por parte de bandas organizadas (Tilly, 1990) que supieron derrotar a sus rivales en términos militares, exigir tributación en forma continua y generar protección para la población desarmada. Los contendientes en la Colombia de hoy no son sólo las tres grandes organizaciones armadas que se disputan el territorio visible, lo son también las muchas organizaciones, bandas, pandillas y milicias que se disputan el control de los barrios de las grandes ciudades. Como lo plantea Thomas Schelling (1984), el crimen organizado requiere de monopolio territorial y resiente la presencia de organizaciones rivales en lo que considera su espacio natural o vital. Sin entrar en la discusión de si se trata o no de organizaciones criminales, el comportamiento real de guerrillas y paramilitares ha sido el de imponer monopolios de control territorial como la única estrategia de expansión y de supervivencia. No se trata de su deseo o de su malevolencia: es la racionalidad de su ejercicio del poder en condiciones de una guerra irregular.

En las grandes ciudades (y en otras no tan grandes, pero decisivas desde el punto de vista del conflicto: Barrancabermeja, por ejemplo), a un nivel micro, en territorios más pequeños, pero afectando a una población mucho mayor, se reproduce el mismo tipo de confrontación, sólo que en forma más compleja e imprevisible. Lo que está en juego en esos territorios urbanos es el tipo de Estado que va a surgir de esta confrontación generalizada, el tipo de orden que se impondrá, las relaciones de poder que serán ejercidas allí. De hecho, hoy mismo, las relaciones de poder están cambiando no sólo en los escenarios de la guerra abierta entre Fuerzas Armadas, guerrilla y autodefensas, sino también en el corazón de las ciudades. Descifrar ese nuevo orden territorial que surge en medio de la guerra es la tarea que deberíamos intentar mientras todavía haya un espacio de reflexión.

Referencias

- CASTILLO, M.P. y SALAZAR, B.. 1996. "Jugando a la violencia en Colombia: El dilema de pagar o no pagar". *Cuadernos de Economía*, 25: 185-197.
- BINMORE, K. 2001. "The Breakdown of Social Contracts" in Durlauf, S. and H.P. Young (eds.), *Social Dynamics*, Cambridge, MA: MIT Press.
- BINMORE, K. 1994. *Game Theory and the Social Contract, Playing Fair*, vol. 1. Cambridge, MA: MIT Press.
- CHWE, M. 2000. "Communication and Coordination in Social Networks", *Review of Economic Studies*, 67: 1-16.
- DAL BÓ, E., P. DAL BÓ and R. Di Tella. 2001. "Plata o Plomo?: Bribes and Threats in a Theory of Bad Politicians", mimeo.
- GAUTHIER, D. [2000 (1986)]. *La moral por acuerdo*. Barcelona: Gedisa.
- PÉCAUT, D. 2001. *Guerra contra la sociedad*. Bogotá: Espasa Hoy.
- POLO, M. 1995. "Internal cohesion and competition among criminal organisations", in *The Economics of organised crime*, G. Fiorentini and S. Peltzman (eds.), Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp. 87- 109.
- SALAZAR, A. 2001. *La parábola de Pablo: auge y caída de un gran capo del narcotráfico*. Bogotá: Planeta.
- SALAZAR, A. 1990. *No nacimos pa' semilla: La cultura de las bandas juveniles de Medellín*. Bogotá: Cinep.
- SALAZAR, B. 2001. "Hobbes, el conflicto y los juegos evolutivos", mimeo (forthcoming en las Memorias del VII Coloquio de Sociología, Universidad del Valle, Cerec.
- SÁNCHEZ, G. 2001. "Colombia: sociedad de desarraigo", *La Revista de El Espectador*, No58, agosto 26.
- SCHELLING, T. 1984. *Choice and Consequence, Perspectives of an Economist*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- TILLY, C. 1990. *The Formation of National States in Western Europe*. Cambridge, MA: Basil Blackwell.
- URREA, F. y QUINTIN, P. 2001. "Segregación urbana y violencia en Cali: trayectorias de vida de jóvenes negros del distrito de Aguablanca", mimeo.
- VANEGAS, G. 1997. *Cali tras el rostro oculto de las violencias*. Cali: Cisalva, Universidad del Valle.
- YOUNG, H. P. 1998. *Individual Strategy and Social Structure*. Princeton: Princeton University Press.

ÁLVARO CAMACHO GUIZADO
Director del Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales
Universidad de los Andes.

Ante todo quiero hacer explícito el agradecimiento por esta invitación. Esta es de las cosas que a uno le gusta, venir acá y ver a los amigos y una cosa que yo esperé hace 25 años era asistir a los 25 años del CIDSE. Pero nunca esperé que mi presencia en esta celebración fuera a discutir algún trabajo Boris Salazar y sobre todo un trabajo de esta naturaleza; yo habría pensado hace 25 años que si algún día me tocara comentar un trabajo de Boris sería un trabajo muy distinto, lo cual no quiere decir que fuera mejor o peor, bueno pero muy distinto en su lenguaje, ya veremos algunas de las cosas que he hecho de menos y que noto como contraste, pero bueno, he tenido también la suerte de comentar éste trabajo que realmente me parece muy bueno pero debo decir que tengo dos problemas gravísimos: primero, cuando ya lo había leído ayer me llegó una nota de correo electrónico diciéndome, no lea ese porque hay uno nuevo y ese nuevo no lo puede bajar del computador. Pero además me llegó una nota que dice vamos a celebrar el lanzamiento del libro de Boris, entonces yo dije: ¡carajo el capítulo éste debe ser del libro! yo he debido leerme el libro antes para poder entender mejor éste capítulo.

Con esto lo que quiero decir, es que creo que este es un capítulo de un libro; encuentro en este trabajo muchas virtudes que no hay necesidad de hacerlas explícitas pero creo que hay una serie de supuestos que tendrían que estar explicitados y yo sospecho que lo están en el libro, o en otro capítulo o en otro artículo, porque aquí se dan por sentados varios supuestos que a mi juicio merecen ser mucho más precisados.

Uno de ellos es justamente lo que yo llamaría una teoría de la violencia en Colombia que de alguna manera Boris esboza aquí pero que creo necesita mucha más elaboración y no me cabe la menor duda de que está en alguno de los capítulos del libro. Me llamó mucho la atención que este artículo se ubica en una perspectiva muy novedosa de lo que se puede llamar la literatura de la violencia en Colombia, la literatura académica o científica, en fin. Yo quería mirar un poco las clasificaciones, lo que se ha hecho en términos de la historiografía de la violencia y las ubicaciones de los diferentes trabajos, los más conocidos por lo menos. Esto me permitiría ver en qué sentido el trabajo de Boris se diferencia de otros anteriores, en qué sentido es muy innovador, en qué sentido es muy provocativo. Carlos Miguel Ortiz en un comentario que escribió una vez a una ponencia que hicimos en un Coloquio de Sociología, Álvaro Guzmán y yo, hizo una especie de esbozo de historiografía de la Violencia; más adelante en un libro que se llama “Historia al Final del Milenio” hizo otro intento de hacer una historiografía de la Violencia y ubica la cosa más o

menos en el siguiente orden. Una primera corriente que el denomina el tratamiento partidista y ahí están las obras del libro de Alonso Moncada, los trabajos con los que trabaja Alberto Valencia, “ Las Balas de la Ley”, toda esta obra que se produjo especialmente en los finales de los cincuenta y comienzos de los sesentas que tiene un tinte muy bipartidista y una orientación hacia la corpabilización de uno o de otro: o la violencia es un proceso generado por los godos o es un proceso generado por los liberales, por los chulavitas o por los cachiporros, en fin, tiene ese primer tratamiento.

Intento de hacer una narrativa sistemática, una ubicación geográfica explícita. Un trabajo empírico por parte de Germán Guzmán y un análisis sociológico bastante discutible por parte de Fals; aparece una cosa jurídica también muy discutible pero más sistemática que podría entrar en una segunda etapa. La tercera es la que también Carlos Miguel denomina la esquematización preferentemente Marxista que tiene como dos corrientes, esa corriente economicista que vio la violencia como el proceso de desarrollo del capitalismo en Colombia y en su enfrentamiento con unas estructuras de orden agrario semi-feudal, etc., que eran el obstáculo para el desarrollo capitalista - la violencia es una forma de penetración salvaje del capitalismo en el campo - hasta otras corrientes más politicistas que vieron en la violencia un proceso de lucha de clases propiamente dicho, luchas sindicales, etc. que dio paso a lo que Carlos Miguel llama una cuarta etapa que es la diversificación de la violencia en los años sesenta donde empieza a aparecer muchos trabajos que ya son más monográficos y que tienden a ver, inclusive a establecer, ciertos parentescos entre la violencia clásica, rural etc., y expresiones más contemporáneas, trabajos de Psicólogos como Jaime Villareal y otros que trata de hacer Alvaro Villar Gaviria. La quinta etapa es lo que se denominó con un termino que yo personalmente rechazo, aun cuando tuve que ver con el en algún momento, el de la llamada violentología que me pareció horrible, me pareció ofensivo porque es que es una caricatura, ya que lo que se intentó hacer, lo principal, fue esa cosa que se llamó la distinción entre las violencias, las diferentes violencia, que no hay una sola, que hay unas formas distintas de matarse con unos efectos muy diferentes sobre el orden social.

En esa clasificación que hace Carlos Miguel Ortiz, que yo creo y la comparto, hay una evidente y notable ausencia de los economistas, hay politólogos, hay historiadores, etc. y solamente ya muy adentrados los noventas realmente aparecen los trabajos de Fernando Gaitán, los de Montenegro y Posada, lo de Camilo Echandía, lo de Jesús A. Bejarano, lo de Mauricio Rubio, lo de Libardo Sarmiento que en parte lo presentó aquí, en este recinto, en el último Coloquio de Sociología en donde ya los ecomistas empezaron a mirar, a partir de su propia profesión y con sus métodos y técnicas entraron a mirar este fenómeno. A mi me parece que hay como dos grandes vertientes notables en esto, una es lo que se puede llamar la vertiente Gary Becker, que es fundamentalmente el crimen y la acción racional; todo este juego de pagos y recompensas por la acción criminal que llevó a decir que el criminal decide hacer, entiende por qué es más barato que el castigo que

recibiría o a una conclusión que a mí me parece que es bastante complicada, y que yo diría ha recibido mucha crítica, que es el énfasis en esa dimensión punitiva del Estado; que hay que hacer que el crimen no pague y esta es una tarea fundamentalmente de los aparatos de justicia y del castigo, de la penalidad. Creo que es un enfoque bastante reduccionista que de algún modo ha tenido muchos adeptos pero también ha desarrollado críticos entre ellos Francisco Gutiérrez, quien en el último número de la revista “Análisis Político” hace un fuerte análisis en el que critica en forma bastante severa a los análisis de éstos economistas. También Fernando Cubides ha hecho otro en un libro reciente de Astrid Martínez sobre Economía, Crimen y Castigo ha hecho una crítica muy fuerte señalando, entre otras cosas, no solamente esa tendencia a examinar la racionalidad del crimen, y la capacidad de satisfacción que tiene el crimen frente al castigo, sino porque tienen un giro y es que normalmente ponen en un capítulo dimensiones sociológicas y las dimensiones sociológicas son como cuatro renglones en los que se señala la relación violencia pobreza. Luego entonces sacan unas estadísticas que muestran que no hay una relación violencia pobreza y luego siguen con el otro enfoque y el modelo, y dele y dele y dele. Entonces como que hay una actitud de despachar esa cosa que llaman sociología, como que eso es una ciencia ahí medio bastarda que no vale la pena, y entonces armaron un discurso muy bien apuntalado, con un aparato estadístico muy impresionante, con una serie de cosas en griego y otras en letras que impresionan mucho. Eso es muy notable, a mí no me parece nada mal, pero tiene ese problema serio. Y hay otro enfoque también de economistas que me parece también bastante complicado cuando tiene también un grado de sofisticación bastante notable, que es el del Banco Mundial tipo Paul Collier que sencillamente dice mire distingamos entre conflicto y guerra. Sí, los conflictos pueden obedecer ha un montón de cosas: hay problemas étnicos, hay minorías, hay religiosos, hay políticos, hay de todo eso, pero esos conflictos se convierten en guerra cuando hay unos recursos naturales que se convierten en objeto de control por parte de las organizaciones sociales. No hay un campo rural, sociopolítico, conflicto. Lo que hay es fundamentalmente una lucha por recursos, y son recursos muy valiosos, muchos de ellos de orden ilegal. Y hay otro enfoque más nuevo que es el tipo Boris, que por ser economista yo ubico su enfoque ahí pero yo no diría que es un enfoque económico porque realmente no hay un modelo económico. Creo que lo de Boris es una superación enorme en relación con éstas tendencias que he venido mencionando y lo que más me gusta a mí es esta idea que el desarrolla de hacer un enfoque interactivo en donde la violencia ya no queda librada en unas estructuras capaces de portar sus propios significados, unas especies de venidurgos que producen sus propios efectos sino que hay unos procesos interactivos que son los que están realmente en la base de las explicaciones del conflicto. Esta es la parte que a mí más me gusta, ahora, lo demás me gusta un poco menos.

Creo que de todas maneras Boris hace un acercamiento mucho mayor que los economistas a esa idea pero yo creo que ahí surgen algunas cordiales divergencias con él. La tesis, el punto de partida de Boris, es que en Colombia se ha venido

creando un nuevo orden social basado en las reglas de coordinación ineficiente, entre las organizaciones armadas y los ciudadanos, y de un nuevo orden social que refleja las características y las limitaciones de este tipo de arreglos sociales. Entonces Boris tiene como dos objetivos en éste trabajo, una idea de orden social y una idea de territorialidad, son como los dos ejes en donde se tejen los procesos decisorios de los múltiples individuos que entran ahí. Pero al respecto quisiera hacer algunas alusiones críticas. A Boris no le gusta esa distinción entre violencia política y violencia no política, dice que no, dice que eso no, pero de todas maneras hace una cita de un comentario que escribe Gonzalo Sánchez a la última obra de Pecaute en donde Gonzalo dice hay que reivindicar el carácter político, es decir el análisis del carácter político de la violencia, porque si no caemos en las corrientes tipo de esos economistas que son profundamente criminalizantes y eso no le conviene a nadie. No, criminalizar la totalidad de la violencia colombiana, eso no le conviene sino - bueno ustedes saben a quien le conviene - y a Boris no le gusta eso según el marco en el que creo que Boris cita. Esto lo digo a pesar de que hay unos trabajos muy serios que han investigado la cosa urbana como los de Fernando Urrea, Odile Hoffmann. Hay un trabajo mío con Alvaro Guzmán que Boris no cita, no ha de creer que somos muy serios pues no lo cita entre los serios, pero como es sobre Cali, tengo que hablar de él. Nosotros tratamos de hacer esa distinción entre violencia política y violencia no política, quiero introducir esto porque me parece que es bueno para la polémica: la violencia política es aquella que tiene por objeto el control que está para apuntalar, para destruir, para desviar, etc. del Estado, de los patrones de dominación, que de este se deducen - el régimen político etc. - A eso yo lo llamo violencia política, distinta de las peleas de borrachos, ajustes de cuentas, incluso entre narcos, o el marido que le pega a la mujer, o la mujer que le pega al marido, yo hago esa distinción. Y Guzmán y yo la hacemos, pero hay un punto que es muy importante y es que yo estaría de acuerdo con Boris en que esa distinción tajante ahí no tiene mayor sentido pero nosotros nos preocupamos por establecer lo que denominamos el sentido político de la violencia no política, que tiene que ver sobre todo con los impactos de esa violencia que no tiene por objeto el control del Estado, sobre el Estado mismo y la forma de su ejercicio. Por ejemplo su impacto sobre la destrucción del aparato judicial que tiene que ver fundamentalmente no sólo con el ejercicio de la justicia - un valor elemental pues de una sociedad - sino que ante la destrucción de la justicia se generan patrones alternativos de dominación, de dominación política, de dominación social, y esto es uno de los más profundos sentidos políticos de la violencia que no tiene arreglos políticos. Nosotros aquí en Cali eso lo vimos con la absoluta claridad cuando tuvimos la época de las limpiezas sociales que fue una alternativa que se planteó ante lo que se consideró que en Cali había una crisis de gobernabilidad frente a la presencia del M-19.

Yo sí creo que es importante mantener esa distinción aun cuando luego las fronteras sean muy borrosas porque hay intercambios de actores. Aquí en Cali se vio claramente esos intercambios de actores cuando el M-19 hacía esos campamentos de la libertad y cogía los niños y los ponía con unas escopetas de

palo y los hacía formar y todo eso; parecía como una especie de caricatura militar pero eso era también darle fuerza de trabajo más o menos entrenada a la delincuencia que la utilizó sobre todo en Medellín. Hoy día se ve que esas fronteras son muy borrosas y la gente transita y hay un montón de turistas que muestran esto, muchachos que transitan entre la milicia, la autodefensa urbana, la guerrilla, en fin, hay un tránsito de actores muy fuerte que hace que esa violencia política y no política tenga fronteras muy borrosas. Las compraventas de secuestros, la asunción por parte de delincuentes no políticos de fachadas políticas para hacer legítima su violencia es una cosa vergonzosa pero sucede, y eso es, me parece a mí que son los efectos políticos de violencias no políticas y al mismo tiempo los parentescos que hacen que esas distinciones que yo creo que son analíticamente fundamentales son claves y por qué. En últimas porque me hago una pregunta que yo creo que debe estar en otro capítulo, no me cabe la menor duda. La pregunta es ¿por qué depredan quienes depredan? Sí, es decir, Boris supone y ustedes lo vieron, y eso está muy bien, eso es preciso, tenemos dos poblaciones: depredadores y depredados. La pregunta es por qué depredan quienes depredan. Si no tenemos una teoría de esto podemos llegar un poco a la teoría de los cleptómanos, los depredadores son uno rateros que van en un barrio así, depredando, o una peor que es como la de Alí babá, unos tipos que cogen un montón de plata, roban, roban y roban y la tienen que meter dentro de unas cuevas. Pero qué hacen con eso, para qué se roba tanto. Si uno roba así se va a vivir a New York, Montecarlo, Miami, compra carros finos y se hace unos consumos muy fuertes y muy buenos; pero robar para quedarse uno por allá en el Caguán, bueno, volveré sobre ese punto enseguida.

Pero cuando Boris entra a plantear su alternativa la tesis es que no se trata de que haya una exclusión social y política surgida del Frente Nacional y unos graves errores históricos de una elites dominantes, en realidad se trata de algo más simple pero también menos fácil de aceptar: es la respuesta racional que unos agentes enfrentados a una situación estratégica bien particular lograron a través de un proceso evolutivo muy poco estudiado en nuestras ciencias sociales. Bueno esto es una teoría de los actores, sí, una teoría del por qué los actores actúan pero no me parece que sea una teoría de la violencia colombiana, no creo que llegue allá. Pero lo que más me preocupa es que hay un montón de cosas que quedan, me parece a mí, por fuera que trabajos que se han hecho y que creo que han enriquecido mucho las perspectivas del estudio de la violencia en Colombia como los trabajos de Molano, el propio Gonzalo Sánchez, Jairo Varo Jaramillo y Fernando Cubides, lo de Carlos Miguel Ortiz y muchos otros que han mostrado las múltiples facetas que esto tiene, de orden histórico, de orden socio-cultural, de orden económico, de orden político, de orden antropológico y hasta de orden psicológico.

Me parece a mí que Boris pasa un poco por encima de esto. Acabo de ver un estudio que es muy discutible pero es muy hermoso, que es la teoría que tiene Chucho Granja sobre la violencia en Colombia, tal vez sobre la historia de las humillaciones, la gente que fue profundamente depredada y se volvió depredadora, para usar el lenguaje de Boris, como producto de toda una historia de humillaciones

de que han sido objeto. La muestra más reciente de esta sensación, de esta idea de la historia de las humillaciones, es la carta de Marulanda a Pastrana en la inauguración de las conversaciones en el Caguán que dice: no se les olvide que ustedes me mataron las gallinas, que ustedes mataron los marranos, que nos sacaron corriendo, que se tiraron una cosechas. Nosotros no hemos sido sino más que humillados y ofendidos toda nuestra vida, es lo que esta diciendo Marulanda, ellos todavía están peleando contra las humillaciones. Yo creo que por ahí hay una serie de elementos que creo - y esta es un poco mi objeción - que el trabajo pasa un poco por encima y me parece que es complicado. Pero creo que en este caso lo que pasa es que hay un intento muy fuerte de abandonar la política, aspecto que me parece muy complicado para la violencia en Colombia, no solo en la explicación sino en esa dimensión más profunda que tiene lo político de la violencia colombiana en todas sus manifestaciones. Me parece que aquí hay un vacío que yo sugiero muy respetuosamente.

De alguna manera no se si cabe pero, bueno, la teoría de Boris es hay depredadores y hay depredados. La capacidad de los primeros, pues de los depredadores, depende de sus ingresos, recursos económicos, acceso, etc., y obviamente esto está distribuido de una manera desigual. Por otro lado está la población depredada que es una población que según Boris ha aceptado su condición de depredada. Yo, haciendo un paréntesis, digo, a mi el lenguaje de la teoría de los juegos no me gusta, no me gusta eso que se dice, que la gente decide, opta, acepta esto como si fuera producto, es decir, es imputar a colectivos unas motivaciones que yo creo que son personalmente individuales y que sobre todo provienen de una extremada racionalidad y de una posibilidad de ejercer una acción muy racional, yo creo que eso está socialmente muy mal distribuido en éste país. Bueno, pero yo diría, lo que Boris dice en términos amplios que se está creando un orden social de depredadores-depredados. Yo le digo a Boris a mí me parece que un orden social es bastante más que eso, un orden social incluye estructuras valorativas, incluye cultura, incluye historia, incluye un conjunto de instituciones. Creo que los colegas sociólogos que nos enseñaron eso nos brincarían; un orden social es mucho más que eso. Aquí hablemos de un orden de dominación, está bien de un tipo de dominación, está bien aceptemos eso, incluso con algunas reservas, pero yo no creo que uno pueda decir simplemente esto es un orden social que se ha construido así.

En el orden de lo territorial, yo con esto sí estoy bastante de acuerdo, sólo que lo pondría en otro lenguaje: la población depredada o con potencialidad de serlo tiende a elegir localizaciones que la sitúen fuera del radio de acción percibido de la organización depredadora, a menos que la dominación de estas últimas se haya convertido, o esté en proceso de convertirse, en un Estado. Pero yo digo, la gente que es amenazada se va cuando se pueda ir porque no a todos los que depredan; mejor dicho sigue: soy depredador tendría interés en que los depredados se quedaran ahí para poderlos depredar pero es que lo que estamos viendo es que les dicen, no, ustedes se tienen que ir de aquí, entonces si se van a quiénes depredan. Sí, hoy precisamente en el Aeropuerto, en las tres horas que me dejó esperando el avión

me encontré con un funcionario del DANE. El municipio de Yopal tiene hoy el 10% de la población rural que tenía en 1993 y ahí están los paras en la parte plana, y el ELN en la ladera y uno dice, bueno, y a quién depredan si los sacaron de ahí. Entonces yo pondría esto así: sí claro la población depredada tiende a elegir localizaciones que la sitúen fuera del radio, pero es que los han sacado, entonces yo creo que le podría parecer a uno un poco más sencillo clasificar a los depredados, es decir, yo haría lo que hace también Boris y en eso estoy de acuerdo. Hay como tres clases de depredados, los pobres, los de clase media y los más ricos. Los pobres se van, los de clase media migran a las ciudades y los ricos o contratan a los paramilitares o se van para el exterior. Pero el punto es, me parece a mí, que no creo que uno necesite, de tanto aparato conceptual para decir eso, cuando uno lo quieren peluquiar pues uno se va, no se deja.

La segunda proposición en lo territorial. Sí, también yo la comparto pero también como que en otra forma los depredados también tienden a llegar a acuerdos de coordinación con las organizaciones depredadoras cuando el costo de desplazarse es mayor que el beneficio o pago esperado de hacerlo, o cuando el costo de contratar seguridad o cambiar de protección es mayor que la amenaza derivada de no llegar a un acuerdo. Bueno, sí está bien, cuando eso es posible; yo cuando leí esto estaba pensando, bueno eso de llegar a acuerdos qué, qué hacemos con los raspachines. A mí eso me dejó un poquito frío, no creo que eso sea producto de un acuerdo, para mí hay una serie de consideraciones mucho más complejas. Es que la teoría de los juegos es una teoría muy compacta, es una teoría muy económica en el sentido de que no usa muchas palabras pero a veces es demasiado compacta.

Hay otro aspecto relacionado con que la efectividad militar y tributaria de la organización depredadora es decreciente con respecto a la distancia de su centro operativo. Sí, pues entre más lejos están es menos más probable que vayan a depredar pero que este efecto negativo de la distancia se ve afectado por la existencia de redes sociales propias de las organizaciones depredadoras penetradas, las milicias, sí, y Boris hace una cosa que a mí me parece muy interesante y es mostrar cómo el tema del traslado de lo urbano no está muy planteado aquí, me parece excelente, pero lo que sí es muy bueno es que estamos mostrando que ese proceso de la gente que se aleja del epicentro de poder de los depredadores termina en las ciudades, pero los depredadores se van detrás y allí se forman los enormes conflictos de los cuales Barranca y Medellín son el más claro referente empírico. Es decir ahí se han anudado de manera inexplicable, sobre todo en Barranca, esas formas de violencia. Bueno y llegamos al final yo aquí tengo que leer porque leo la mejor parte, lo que más me gustó de Boris, hay un párrafo que yo creo que realmente es muy bueno, que dice “más que la pérdida de toda materialidad, lo que supone ya superposición y penetración de redes sociales en el paso de una visión del territorio como controlable en términos físicos por la organización que está asentada en cada región o Zona, a una interpretación del mismo como un espacio virtual en el que la presencia de redes de distinto signo mantiene un movimiento fluido de la dominación por parte de las organizaciones armadas. Pero esto no implica que las

oscilaciones en el control de los territorios puedan mantenerse para siempre. La intensidad de la guerra en algunas zonas en disputa lleva a que se alcance cierto tipo de definición que luego puede consolidarse si la organización victoriosa es capaz de lograr las alianzas y vínculos sociales que aseguren su legitimidad como garante desorden político”. Buenísimo, excelente, totalmente de acuerdo pero creo que no tiene nada que ver con lo anterior.

Me parece excelente porque aquí ya entramos en un problema de alianzas, en un tema de condiciones de acción de la organización, los vínculos sociales, un problema de legitimidad que pueda garantizar el orden público. Fíjense que ahí no depredan en esas condiciones, yo creo, me gusta mucho, nos salimos un poco del juego de la gallina y el halcón y entramos en un mundo de múltiples determinaciones que muestran, mi querido Boris, que la situación es desigual y combinada, compleja y contradictoria, y al final dice “no se puede olvidar que los Estados Nacionales de hoy nacieron de poco más que del ejercicio del control territorial por parte de bandas organizadas que supieron derrotar a sus rivales en términos militares, exigir tributación en forma continua y generar protección para la población desarmada. Los contendientes de la Colombia de hoy no son sólo las tres grandes organizaciones armadas que se disputan el territorio visible, lo son también las muchas organizaciones, bandas, pandillas y milicias que se disputan el territorio de los barrios de las grandes ciudades. Es como lo plantea Thomas Schellin, el crimen organizado requiere de un monopolio territorial y resiente la presencia de organizaciones en lo que considera su espacio natural o vital. Sin entrar en la discusión de si se trata o no de organizaciones criminales, el comportamiento real de guerrillas y paramilitares ha sido el de imponer monopolios de poder territorial como la única estrategia de expansión y de supervivencia. No se trata de su deseo o de su malevolencia: es la racionalidad de su ejercicio de poder en condiciones de una guerra irregular”. Termina Boris diciendo: lo que está en juego en estos territorios urbanos es el tipo de Estado que va a surgir de esta confrontación generalizada, el tipo de orden que se impondrá, las relaciones de poder que serán ejercidas allí. De hecho las relaciones de poder están cambiando no sólo en los escenarios de guerra abierta, entre fuerzas armadas, guerrilla y autodefensas, sino también en el corazón de las ciudades. Descifrar este mero ordenamiento territorial que surge en medio de la guerra es la tarea que deberíamos intentar mientras todavía haya un espacio de reflexión. Creo que esto es lo mejor posible, creo que aquí está lo más sabio, lo más inteligente y lo más provocativo. Yo no puedo hacer nada distinto de leer y citarlo con toda mi aprobación si sirve para algo, pero vuelvo a insistir que yo prefiero mucho a ese Boris que dice estas cosas no con árboles de juegos, este es un problema de gusto ante todo yo simplemente señalo que me parece que hay un enorme potencial en el trabajo que vienes realizando y que saldré de aquí a comprar el libro para saber cómo resuelvo ese problema, gracias.